

Embargado hasta las 6:01 CET (Berlín) del jueves 28 de enero de 2021

CPI 2020: América

Con una puntuación media de 43 por quinto año consecutivo, América es un escaparate de corrupción y mala gestión de fondos en una de las regiones más afectadas por la crisis de la covid-19.

Canadá y Uruguay mantienen las puntuaciones más altas, con 77 y 71 puntos respectivamente. Nicaragua, Haití y Venezuela se sitúan a la cola, con 22, 18 y 15 puntos respectivamente.

Corrupción y covid-19: grandes retos

En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, la covid-19 ha puesto de relieve profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población, como [las mujeres, las niñas](#), las personas mayores, las poblaciones indígenas, los migrantes y la población afroamericana.

Al igual que en otras partes del mundo, los gobiernos americanos tomaron medidas extraordinarias ante la covid-19, con [estados de alarma](#) que restringían los derechos civiles. Las restricciones coartaron la libertad de expresión y de reunión, debilitaron los controles y contrapesos institucionales y [redujeron el espacio de la sociedad civil](#).

Una concentración alarmante de poder en el brazo ejecutivo de países como [Colombia](#) (39) y [El Salvador](#) (36) ha contribuido a una [explosión de irregularidades y casos de corrupción](#) vinculados a la contratación relacionada con la covid-19. En todo el continente, los ciudadanos tienen dificultades para conseguir información fiable y al día sobre datos sanitarios y suministros de emergencia.

Un reto importante es lograr que los fondos y programas de ayuda para la covid-19 no acaben en manos de la corrupción y lleguen a sus destinatarios legítimos. De no distribuirse debidamente estas ayudas, existe el riesgo de que aumente el malestar social, se aviven las llamas de un populismo dañino y [crezcan aún más la pobreza](#) y la desigualdad.

Los gobiernos deben procurar que el desarrollo, adquisición y distribución de tratamientos y vacunas contra la covid-19 sean transparentes y justos. Además, tienen la obligación de permitir a las organizaciones de la sociedad civil y a la prensa actuar como guardianes que observen y pidan cuentas a políticos y empresarios. En demasiadas ocasiones, los gobiernos intentan aprovechar este tipo de crisis para conseguir ventajas políticas a expensas de la ciudadanía.

Países estancados

Con 36 puntos, [El Salvador](#) lleva ocho años estancado en el índice. Sin embargo, el país sufrió un importante revés con la [derogación a causa de la pandemia de una importante ley de acceso a la información](#).

Esta ley era la única vía que permitía a los colectivos de la sociedad civil vigilar el uso adecuado de los fondos del gobierno para [adquisiciones relacionadas con la covid-19](#). Desgraciadamente, el estado de alarma dio pie a unos procesos de contratación menos transparentes y más arriesgados, lo que condujo a [irregularidades](#) inauditas.

Uno de los casos de corrupción más graves fue un contrato entre el gobierno de El Salvador y una [empresa española de repuestos para automóviles](#) por valor de doce millones de dólares para la adquisición de suministros sanitarios a precios abusivos. Al igual que los países de su alrededor, El Salvador carece de criterios claros para la selección de beneficiarios de los [bonos de emergencia del gobierno](#).

Muchos de los países de las Antillas dependientes de la exportación de productos básicos y del turismo sufrieron un fuerte impacto por las repercusiones económicas de la covid-19. Estos países se ven lastrados por la falta de presupuestos para emergencias sanitarias, ya sus gobiernos tienen grandes dificultades para cubrir gastos con unos [recursos ya de por sí muy limitados](#)

Las calificaciones de Jamaica (44), Trinidad y Tobago (40), y la República Dominicana (28) muestran escasos avances en el Índice de Percepción de la Corrupción. En 2020, los dos primeros reeligieron a los partidos que estaban en el poder. En cambio, la elección del nuevo gobierno dominicano ha sembrado esperanza en la [lucha contra la corrupción](#).

Países que han empeorado significativamente

Con una puntuación de 25, Guatemala es uno de los países que más han decaído en la región: 8 puntos desde 2012. El Parlamento amenazó al derecho a la información con reformas que suponen un [grave retroceso en la supervisión pública](#) y generan riesgos de politización. La ciudadanía ha reaccionado con manifestaciones contra los recortes presupuestarios en educación y sanidad, y contra el hecho de que [estos recortes se negociaran y aprobaran en secreto](#).

En Venezuela (15), la corrupción generalizada de los últimos veinte años es uno de los principales motivos de la [crisis humanitaria](#) actual. El país ha perdido 5 puntos en el índice desde 2013. La pandemia de covid-19 no sólo ha profundizado la escasez de medicinas, suministros sanitarios y material esencial sino que ha deteriorado la infraestructura hospitalaria. En las dos últimas décadas el país perdió más de 5 000

millones de dólares a la corrupción solamente en el sector sanitario. Esta lacra amenaza la vida y la salud de millones de venezolanos.

Países que han mejorado significativamente

Con 39 puntos, Ecuador ha mejorado considerablemente su posición en el índice, con un aumento de 7 puntos desde 2012. Entre las decisiones judiciales clave se encuentra la [condena](#) del expresidente del país Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y otras dieciocho personas por aceptar casi quince millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos, dinero que fue utilizado para financiar campañas electorales entre 2012 y 2016.

A pesar de hitos como este, [la corrupción ocupó el centro del escenario durante la crisis de la covid-19](#). Actualmente hay 141 investigaciones abiertas de casos de corrupción en la contratación, malversación de fondos y precios abusivos de suministros sanitarios como las mascarillas y las bolsas para cadáveres. De cara al futuro, una puesta en vigor adecuada de la [ley anticorrupción](#) recientemente aprobada por la Asamblea Nacional propiciaría la mejora de los procedimientos de contratación pública y limitaría los abusos.

Países a observar

Perú

Con una puntuación de 38, Perú ha subido dos puntos pero continúa relativamente estancado en el índice desde 2012. Las investigaciones de casos de corrupción y la reciente ratificación de leyes cruciales contra la corrupción son algunos de los avances conseguidos.

Concretamente, dos leyes dan motivos para la esperanza. La primera impide a las personas condenadas por corrupción [postularse para cargos públicos u ocupar puestos de confianza](#). La segunda mejora la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad de la [financiación de los partidos políticos](#).

Las elecciones presidenciales programadas para abril de 2021 presentan una oportunidad de acabar con la impunidad y pedir cuentas a los poderosos en este país, donde el descontento social por la corrupción, la covid-19 y la [crisis económica](#) continúa siendo elevado. Para conservar la confianza de la población, las investigaciones de políticos de alto nivel y empresarios destacados deberán llegar a los tribunales, que deberán dictar sentencias apropiadas.

Perú sufre [corrupción estructural](#), impunidad e [inestabilidad política](#). En menos de cinco años, el país ha rechazado a cuatro presidentes, tres de los cuales están siendo investigados.

Honduras

Con 24 puntos en el índice, Honduras obtiene este año su puntuación más baja de la serie histórica: dos puntos menos que el año pasado. En el último año, la pandemia de

covid-19 y los huracanes han asolado el país, donde la pobreza y la desigualdad continúan siendo muy altas.

[Unas instituciones débiles contribuyen a la falta de preparación para afrontar los desastres](#). A ello se une una economía poco diversificada que genera una [dependencia excesiva de la agricultura y los recursos naturales](#).

El estado de la lucha contra la corrupción tampoco es esperanzador. En la última década, el país [ha sufrido pérdidas millonarias](#) por esta causa y experimentado reveses importantes en la lucha contra la impunidad por la [desaparición de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, de la Organización de Estados Americanos](#). El Congreso Nacional [aprobó un nuevo Código Penal](#) que [fomenta la corrupción y dificulta su investigación](#).

Las fuentes también revelan una alarmante [falta de planificación en la compra de suministros relacionados con la covid-19](#), junto con precios excesivos para la adquisición de material sanitario y [acuerdos opacos en la contratación](#) para los hospitales de campaña.

En Honduras, la transparencia es fundamental para la recuperación de la covid-19 y los desastres naturales.

Estados Unidos

Con 67 puntos, Estados Unidos ha caído a su punto más bajo en el índice desde 2012. Entre las tendencias más preocupantes están los [intentos de modificar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero](#), que es la ley de referencia internacional para la prevención de sobornos; los [ataques a denunciantes de irregularidades](#); la [escasa supervisión de los fondos de ayuda por la pandemia](#); y los [intentos de promover bulos como el del fraude generalizado en las elecciones presidenciales](#), con el fin de socavar una elección presidencial libre y justa.

En concreto, los desvíos más graves respecto a la ética democrática incluyen el [cese de inspectores generales por denunciar la corrupción y el fraude](#) en operaciones del gobierno y la [intervención personal del presidente para presionar a los funcionarios electorales](#) e [incitar a la violencia](#) con el fin de modificar en su favor los recuentos certificados de votos.

En tono más positivo, el [Congreso aprobó a fin de año una ley histórica contra el blanqueo de fondos](#) y las [primeras señales de la nueva administración](#) son alentadoras, pero las duras divisiones políticas que caracterizan a Estados Unidos en la época actual lo sitúan en la categoría de países a tener en observación.

En EEUU, la labor anticorrupción se vio obstaculizada por el rechazo a la supervisión, la resistencia temprana a la transparencia y el despido de los inspectores generales.